



Entrevista

Juan Pappier: “en Guatemala hay un pacto de corrupción que está arrasando con el estado de derecho y la democracia.”



Juan Pappier

Subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, adonde trabaja sobre varios países de la región. Ha realizado investigaciones y escrito informes sobre abusos relacionados con conflictos armados, represión contra manifestantes, y ataques contra el Estado de derecho, entre otros asuntos.

El próximo 25 de junio se celebrarán las elecciones generales de Guatemala, en un clima de debilidad institucional generalizada. La corrupción ha permeado hasta lo más profundo del Estado, impactando también el proceso electoral.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado sobre las condiciones en las que se celebrarán estos comicios, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y Wola.

Desde DemoAmlat entrevistamos a Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de HRW, sobre el contexto en el que se celebrarán estas elecciones.

¿Qué impresiones tiene Human Rights Watch respecto al sistema judicial en Guatemala?

Mira, en Guatemala estamos viendo una democracia que está en riesgo y que lamentablemente no recibe la atención internacional

que merece. Y no la recibe porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, como en El Salvador, o en México, o como ocurrió con Jair Bolsonaro en Brasil, aquí no hay un presidente o una figura única que esté liderando este proyecto autoritario.

El proyecto autoritario en Guatemala es muy distinto, es un proyecto oligopólico de distintos intereses, algunos de ellos empresariales, otros militares, otros de crimen organizado, que trabajan de forma conjunta, de forma coordinada, con el propósito de garantizar la impunidad por hechos de corrupción y por violaciones de derechos humanos. Y para eso están arrasando con el Estado de Derecho y con la democracia guatemalteca. Han cooptado las instituciones democráticas, estamos hablando de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, de buena parte del Tribunal Supremo Electoral, de la Procuraduría para los Derechos Humanos y, por supuesto, del Ministerio Público, que se ha transformado en el arma que utiliza este proyecto autoritario que hay en Guatemala para criminalizar. Para perseguir a aquellas personas que se atreven a investigar o a exponer la corrupción y el abuso de poder en Guatemala.

Es decir, estamos en una democracia que está en crisis y en este contexto de cooptación de las instituciones es preocupante que vamos a unas elecciones donde hay pocas garantías de que los

“El proyecto autoritario en Guatemala es muy distinto, es un proyecto oligopólico de distintos intereses, algunos de ellos empresariales, otros militares, otros de crimen organizado, que trabajan de forma conjunta, de forma coordinada, con el propósito de garantizar la impunidad por hechos de corrupción y por violaciones de derechos humanos.”

guatemaltecos y las guatemaltecas van a poder elegir de forma libre y justa quiénes serán sus próximas autoridades, incluyendo su presidente.

¿Qué pasó con la Comisión Internacional contra la Impunidad? Ese esfuerzo que se hizo desde el año 2006 y duró alrededor de una década. ¿Qué pasó con ese pacto que se había organizado en ese momento para darle cabida a esta comisión de investigación contra la impunidad y por qué no continuó?

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la comisión que era un organismo creado por acuerdo con las Naciones Unidas, desempeñó un rol crucial para exponer la corrupción, para luchar contra la impunidad, ayudando a dismantelar redes de corrupción, demostrando altas tramas de corrupción a altos niveles del Estado en el poder legislativo, en el poder judicial y también el poder ejecutivo.

Lo que ocurrió fue que este esfuerzo concertado, esto que en Guatemala se conoce como un pacto de corruptos, logró terminar con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Esto ocurrió durante el gobierno de Jimmy Morales, que declaró no grato al entonces comisionado Iván Velásquez y que logró terminar con el acuerdo con las Naciones Unidas que establecía esta comisión. Y parte de la culpa por este problema lo tienen los Estados Unidos, que durante la administración de Donald Trump y en buena medida bajo el liderazgo para América Latina que tenía el senador Rubio, decidió hacer la vista gorda y permitir que en Guatemala se termine con estos esfuerzos para luchar contra la impunidad. Entonces lo que estamos viendo ahora es una cooptación de las instituciones democráticas que se utilizan para tomar venganza, para tener revancha frente a aquellos fiscales, jueces o miembros de la Comisión de la CICIG que investigaron la corrupción y el abuso de poder en el país.

Con respecto al proceso electoral, ¿qué papel tiene el Tribunal Electoral dentro de este pacto de impunidad o de corrupción que ha de alguna manera cooptado el Estado guatemalteco? ¿Y cómo se expresa esta cooptación en cuanto a los derechos políticos de las personas para competir? Ya que hemos visto inhabilitaciones que han sido denunciadas desde Humans Right Watch a distintos candidatos por razones dudosas, con criterios que a veces no se aplican a todos los partidos o a todos los candidatos. Entonces, ¿cómo eso afecta los derechos políticos, tanto pasivos de las personas que quieren postularse, como también del electorado guatemalteco que va a ver mermada su capacidad de elección?

Probablemente lo que más nos preocupa de las elecciones en Guatemala son estas exclusiones arbitrarias y abusivas de candidatos. Y esto ha ocurrido tanto con candidatos de izquierda, como es la lideresa indígena Telma Cabrera, como con candidatos de derecha, como Roberto Arzú. A ninguno de los dos se les permite participar en decisiones que nosotros creemos que deben ser revisadas porque no son justas o porque se han aplicado distintos raseros para evaluar a los distintos candidatos que se postulan en Guatemala.

“Estamos en una democracia que está en crisis y en este contexto de cooptación de las instituciones es preocupante que vamos a unas elecciones donde hay pocas garantías de que los guatemaltecos y las guatemaltecas vayan a poder elegir de forma libre y justa quiénes serán sus próximas autoridades, incluyendo su presidente.”

Y además, ha habido esfuerzos por excluir al candidato de centro o centro derecha, Edmond Bulet, y recientemente esfuerzos por perseguir penalmente al candidato Carlos Pineda, que según las últimas encuestas estaría liderando la intención de votos.

Es decir, aquí lo que vemos es que se utiliza ya sea las exclusiones del Tribunal Supremo Electoral o la persecución penal en manos del Ministerio Público para interferir con el proceso electoral y con ello no se permite que sean los guatemaltecos en elecciones justas y libres quienes elijan a sus próximos gobernantes.

¿Han tenido contacto con las misiones de observación electoral, por ejemplo, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, o alguna otra misión que tenga la intención de estar en Guatemala para expresar estas preocupaciones?

En Guatemala afortunadamente va a haber dos misiones electorales, una de la OEA y una de la Unión Europea. Creo que cumplen un rol crucial en este proceso electoral y nuestro mensaje para ellos ha sido, primero, que la observación tiene que ser integral, que aquí no nos podemos quedar solamente con la foto de lo que pasa el día de las elecciones, sino que hay que ver la película completa y todo el proceso para excluir candidatos que se está llevando a cabo en estos momentos en el país.

Pero además hay que ponerle el ojo a un tema que es muy importante en Guatemala, que es el financiamiento electoral ilícito. La CICIG cuando estaba en el país concluyó que el financiamiento electoral ilícito es el origen de la corrupción en el país. Y hemos recibido cada vez más reportes sobre el involucramiento del dinero del narcotráfico en campañas electorales en Guatemala, es decir, una situación muy preocupante para estas elecciones en el país y creo que para ello tanto la Unión Europea como la OEA tienen un rol extraordinariamente importante que cumplir para proteger la democracia guatemalteca.

¿Qué papel crees que puedan desempeñar las organizaciones de sociedad civil locales y el periodismo que se atreve a de alguna manera a visibilizar la situación o estas condiciones irregulares en las que se están dando las elecciones?

El periodismo independiente y las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol supremamente importante que cumplir en Guatemala, porque ante la falta de organismos independientes la sociedad civil y el periodismo son los únicos que pueden fiscalizar la tarea de las autoridades en el país. Ellos son quienes pueden exponer los entramados de corrupción, quienes pueden develar el abuso de poder, quienes pueden mostrarle al mundo las violaciones de derechos humanos que ocurren en Guatemala.

Por eso hemos sido muy claros con la comunidad internacional, con el gobierno de Estados Unidos, también con la Unión Europea, sobre la necesidad de apoyar los esfuerzos de la sociedad civil guatemalteca, del periodismo independiente, de aumentar el financiamiento y de garantizarles protección, porque de poco sirve que estas personas terminen exiliadas una vez que salen del país, su capacidad de influir, su capacidad de exponer el abuso de poder en Guatemala disminuye significativamente.

Hay que protegerlos en Guatemala, hay que ayudarlos con el financiamiento, porque en buena parte depende de ellos el futuro de la democracia guatemalteca.

“El periodismo independiente y las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol supremamente importante que cumplir en Guatemala, porque ante la falta de organismos independientes la sociedad civil y el periodismo son los únicos que pueden fiscalizar la tarea de las autoridades en el país.”